



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Borrador de Real Decreto sobre comunicaciones telemáticas en la Administración de Justicia, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúpleme informarle lo siguiente:

El Proyecto sometido a informe tiene por objeto, conforme a lo dispuesto en su artículo 1, el desarrollo de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, en lo que afecta a las comunicaciones y notificaciones telemáticas; es decir, conforme al artículo 3, la presentación o remisión a los órganos judiciales de los documentos por parte de los particulares, profesionales de la Justicia y Administraciones públicas o instituciones a los órganos judiciales y la comunicación a aquéllos de los actos procesales por parte de los órganos jurisdiccionales.

De este modo, se establecen en el Capítulo I las disposiciones generales aplicables a todos los sistemas de comunicación y notificación, partiendo del derecho de los ciudadanos a elegir el modo en que las mismas tendrán lugar, consagrado en el artículo 4.1 del Proyecto, en desarrollo del artículo 33 de la Ley 18/2011, sin perjuicio de los supuestos en los que dichas comunicaciones y notificaciones habrá de llevarse a cabo por medios electrónicos, desarrollándose a continuación los distintos supuestos de comunicaciones telemáticas y estableciendo el régimen aplicable al Sistema LexNET, reemplazando así el Borrador lo dispuesto en el Real decreto 84/2007, de 26 de enero, que es objeto de derogación, así como la comunicación a través de la sede judicial electrónica, refiriéndose a la presentación de escritos a través de la sede judicial electrónica y la recepción de notificaciones por comparecencia en dicha sede, así como la presentación de escritos mediante correo electrónico, la recepción en la dirección electrónica habilitada o la comunicación edictal electrónica.

Dentro de las disposiciones generales, el artículo 7 del Borrador establece que “lo dispuesto en este Real Decreto se aplicará observando y garantizando la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de la Administración de Justicia en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, del Protección de datos de carácter personal, en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en las Leyes procesales.

Asimismo, el Anexo I del Borrador regula los ficheros relacionados con la acreditación de las comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos y



la gestión de los usuarios del sistema LexNET, reproduciendo el contenido del Anexo I del Real Decreto 84/2007.

En relación con las comunicaciones y notificaciones telemáticas en el ámbito de la Administración de Justicia, como ya se ha indicado, el artículo 33 de la Ley 18/2011 se refiere a las comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de Justicia, señalando en su apartado 3 que “Las Administraciones competentes en materia de justicia publicarán, en el correspondiente «Diario Oficial» y en la propia sede judicial electrónica, aquellos medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto en el ejercicio de su derecho a comunicarse con las oficinas judiciales”.

Por su parte, el artículo 34.1 dispone que “el sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la salida y las de la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como de acceso a su contenido”, añadiendo el apartado 2 que “en caso de que el acto de comunicación no pueda llevarse a cabo por medios electrónicos, se procederá a imprimir la resolución y la documentación necesaria, procediéndose a la práctica del acto de comunicación en la forma establecida en las leyes procesales e incorporándose a continuación el documento acreditativo de la práctica del acto de comunicación, debidamente digitalizado, al expediente judicial electrónico. En todo caso, el destinatario del acto de comunicación tendrá derecho a obtener copia de la documentación recibida en formato electrónico”. Finalmente el artículo 35 se refiere a las comunicaciones edictales electrónicas, estableciendo que “la publicación de resoluciones y comunicaciones que por disposición legal deban fijarse en tablón de anuncios será sustituida por su publicación en la sede o subsede judicial electrónica”. Igualmente el artículo 38 se refiere a presentación por medios electrónicos de escritos, documentos u otros medios o instrumentos.

Asimismo, deben tenerse en cuenta los criterios ya manifestados por esta Agencia en su informe de 11 de mayo de 2015, referido al Proyecto de Orden de creación de la Sede Judicial Electrónica correspondiente al ámbito territorial del Ministerio de Justicia y, en particular, el emitido en fecha 21 de julio de 2006 en relación con el entonces Proyecto de Real decreto de implantación del Sistema LexNET, siendo reseñable que dicho Proyecto no incorporaba el Anexo I, referido a los ficheros asociados al sistema, que fue incorporado como consecuencia de las observaciones manifestadas por la Agencia, por lo que la misma no pudo hacer ninguna observación sobre su contenido.

El segundo de los mencionados informes analizaba la legitimación para las sucesivas cesiones de datos producidas a través del mencionado sistema



de comunicaciones y notificaciones en el ámbito de la Administración de Justicia, indicando lo siguiente:

*"(...) conforme a lo dispuesto en el artículo 11 y 12 del Proyecto de Real Decreto, en donde se regula la operatividad funcional de la presentación telemática de escritos y documentos y del traslado telemático de copias entre Procuradores y la operatividad funcional de la realización telemática de actos de comunicación procesal, se prevé la transmisión de información por vía telemática, la transmisión de dichos datos supondrá una cesión de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, como "toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado",*

*Con carácter general, la cesión o comunicación de datos de carácter personal viene regulada en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica al establecer que "los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado." El consentimiento deberá ser otorgado con carácter previo a la cesión y suficientemente informado de la finalidad a la que se destinan los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquél a quién se pretende comunicar (artículo 11.3), y que debe recabar el cedente como responsable del fichero que contiene los datos que se pretenden ceder.*

*La obligación de consentimiento sólo se verá exceptuada en los supuestos enumerados en el artículo 11.2, cuyo apartado a) se refiere al caso en que exista una norma con rango de Ley habilitante de la cesión y el apartado 11.2 d) que permite el acceso a los datos sin consentimiento "cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas".*

*De este modo, la comunicación de los datos a los órganos jurisdiccionales, se encuentra fundamentada en el apartado d), dado que el legislador, a través de la excepción contemplada en el artículo 11.2 d) de la Ley Orgánica 15/1999, ha querido dar preferencia al derecho a la tutela judicial.*

*Por otro lado la comunicación de los datos a las demás partes que intervengan en el proceso, se fundamenta no sólo en el artículo 24 de la Constitución Española donde se regula el derecho fundamental de las partes a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos*



*e intereses (artículo 24.1 de la Constitución), y, en concreto del derecho fundamental de las partes “a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa” (artículo 24.2 de la Constitución), sino también en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 234.2 de que establece “Asimismo las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo tendrá derecho a obtener copias simples de escritos y documentos que consten en autos, no declarados secretos ni reservados”.*

*Además en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 273 señala “De todo escrito y de cualquier documento que se aporte o presente en los juicios se acompañarán tantas copias literales cuantas sean las otras partes.”, teniendo dicha ley carácter supletorio respecto de las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales y militares, ya que así lo establece el artículo 4 de la misma.”*

Esta argumentación resulta igualmente aplicable al supuesto ahora analizado, siendo además preciso indicar que la legitimación para las mencionadas cesiones de datos encontraría asimismo su apoyo en lo dispuesto en la propia Ley 18/2011, partiendo de que las comunicaciones y notificaciones únicamente se efectuarán necesariamente por medios electrónicos en los supuestos en los que la propia Ley prevé la posible exigibilidad de este requisito o la establece de modo expreso. Asimismo, la legitimación señalada resultaría igualmente aplicable en los supuestos de comunicaciones a través de la sede judicial electrónica, a las que se refiere el Capítulo III del Borrador.

Sentada esta premisa, y teniendo en cuenta que los distintos sistemas se fundamentan en la utilización de certificados de firma electrónica avanzada, conforme a lo dispuesto por el Reglamento (UE) 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, tal y como se deriva de lo establecido en el artículo 6 del Borrador, cabe considerar que lo dispuesto en el texto se ajusta a lo establecido por la normativa de protección de datos de carácter personal, teniendo además en cuenta la remisión efectuada por el artículo 7. No obstante, se hace preciso efectuar dos aclaraciones en relación con este sistema y con la comunicación edictal a la que se refiere el artículo 20 del Borrador.

En cuanto a lo señalado en el artículo 7, esta Agencia coincide con el mismo en el sentido de considerar aplicable, en todo caso, lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, reproduciendo así lo señalado en el artículo 3 del Real decreto 84/2007. No obstante, el precepto ahora citado difiere de su antecedente normativo en el sentido de que la remisión se efectúa únicamente a la Ley Orgánica y no a su normativa de desarrollo.



La referencia a la citada normativa no resulta baladí en este caso, por cuanto la garantía adecuada de la seguridad en el tratamiento y comunicación de los datos derivados del funcionamiento de los sistemas establecidos en el Proyecto resulta esencial para garantizar, por una parte, la integridad de las comunicaciones y notificaciones efectuadas y por otra la confianza en el sistema, mediante el adecuado desarrollo de los sistemas de identificación y autenticación que el Borrador establece.

Si bien la Ley Orgánica 15/1999 establece en su artículo 9 la obligación de implantación de las medidas de seguridad que impidan la pérdida, alteración y acceso necesario a los datos, las concretas medidas de seguridad exigibles en estos sistemas aparecen recogidas en el Título VIII de su reglamento de desarrollo. Por ello, la referencia a esa normativa de desarrollo de la Ley Orgánica deviene esencial en el presente caso. A tal efecto, debe recordarse que la remisión a esa normativa fue incorporada al real Decreto 84/2007 precisamente como consecuencia de la observación efectuada en el mismo sentido a la que ahora se realiza en el preceptivo informe emitido por la Agencia Española de Protección de Datos.

De este modo, **resulta necesario que el artículo 7 se refiera no sólo a la Ley Orgánica 15/1999, sino también a sus disposiciones de desarrollo.**

En cuanto a las comunicaciones edictales, el artículo 20 se limita a indicar que se publicarán en el tablón edictal de la sede o subsele electrónica aquellas resoluciones y actos de comunicación que requieran por disposición legal su publicación en el tablón de anuncios del órgano u oficina judicial”.

El artículo 11.2 f) de la Ley 18/2011 prevé la publicación en el tablón de las resoluciones y comunicaciones, puestas a disposición de los ciudadanos y profesionales. En el mismo sentido, el artículo 35 de la misma Ley se refiere a estas publicaciones en términos idénticos a los del Proyecto ahora informado. A su vez la Orden JUS/1126/2015, de 10 de junio se limita a referirse al tablón como integrante de la sede judicial electrónica.

En este sentido, es preciso tener en cuenta que no existe una norma específica que regule el acceso a la información contenida en los tablonc edictales electrónicos en el ámbito de la Administración de Justicia, por lo que no puede conocerse si dicha información será accesible para cualquier persona o si lo sería únicamente para quienes accedieran con los medios establecidos en el Borrador ahora informado y previstos en su artículo 6.

Si el acceso fuera público, de forma que cualquiera pudiera acceder al contenido de las notificaciones contenidas en el tablón edictal de la sede judicial electrónica correspondiente deberían tenerse en cuenta dos cuestiones



especialmente relevantes en materia de protección de datos de carácter personal:

- En primer lugar, el acceso a la información tendría por objeto la notificación del correspondiente acto procesal de comunicación a quienes son parte en el proceso y no legitimaría una utilización indiscriminada de la información por terceros que pudieran acceder a la información como consecuencia de su carácter abierto.
- En segundo término, la información, en principio podría incluso ser accesible a través de motores de búsqueda en Internet, lo que generaría un riesgo aún mayor de conocimiento o acceso a la información para fines que exceden de los que justifican la publicación de la notificación.

Por este motivo, sería preciso que el artículo 20 incorporase dos cautelas específicas que evitasen los problemas planteados: la primera de ellas sería el mero recordatorio de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 y sus disposiciones de desarrollo a cualquier tratamiento ulterior de la información que pudiera encontrarse publicada en el tablón edictal; la segunda establecer mecanismos que eviten la indexación a la que se ha hecho referencia, debiendo tenerse a tal efecto en cuenta la relevancia de la doctrina derivada de lo acordado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 13 de mayo de 2014 (asunto Google v. AEPD y Mario Costeja González).

En relación con el segundo de los supuestos, cabe recordar que las distintas normas reguladoras de los tabloneros edictales electrónicos en el seno de la Administración General del Estado han venido recogiendo en su articulado una cautela similar a la que acaba de mencionarse. Así, por ejemplo, el artículo 4.2 de la Orden INT/3022/2010, de 23 de noviembre, reguladora del Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico, establece que “la Dirección General de Tráfico ofrecerá en la sede electrónica del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico un sistema de búsqueda avanzado que permitirá a los ciudadanos localizar si tienen edictos publicados en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico, así como su recuperación e impresión, tanto de los que se encuentren dentro del plazo de publicación como de aquellos en los que dicho plazo haya concluido. Dicho sistema de búsqueda avanzado contará con los mecanismos necesarios para evitar la indexación y recuperación automática de publicaciones a través de motores de búsqueda desde Internet”.

De este modo, **esta Agencia considera necesario que el artículo 20 contenga dos previsiones adicionales que establezca el sometimiento a la Ley Orgánica 15/1999 y sus disposiciones de desarrollo de cualquier tratamiento de datos derivado de la consulta del tablón edictal, así como la adopción de mecanismos que eviten la indexación de la información del tablón por parte de motores de búsqueda en Internet.**



Resta por último hacer referencia a los ficheros objeto de creación por el Anexo I del Borrador, que como ya se dijo reproducen el Anexo I del Real Decreto 84/2007 que, no obstante, no fue informado por esta Agencia, al adoptarse precisamente como consecuencia de sus observaciones al Proyecto.

Como cuestión previa, es preciso señalar que debería suprimirse las referencias efectuadas en el apartado de medidas de seguridad al Real decreto 994/1999, de 11 de junio, que fue derogado por el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica, siendo ésta la norma que debería citarse.

Por otra parte, en ninguno de los dos supuestos se prevé que exista cesión de los datos, debiendo valorarse si las mismas no tendrán lugar, en relación con el fichero de información acreditativa de las transacciones a los propio órganos jurisdiccionales o a las partes en los procesos en que se produzca la transacción electrónica y si los datos del fichero de usuarios del LexNET no serán comunicados, la menos en lo referente a la clave pública de firma.